



## Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia.](#)

### Usted es libre de:

**Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

**Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia



### Bajo los siguientes términos:



**Atribución** — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.

**No hay restricciones adicionales** — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

**DE LA PROTECCIÓN DEL ESTADO AL DERECHO DE LA PRESUNCIÓN DE  
INOCENCIA COMO GARANTÍA DEL PROCESO PENAL, FRENTE AL DERECHO A  
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN (MEDIOS DE COMUNICACIÓN)**

**FROM THE PROTECTION OF THE STATE TO THE RIGHT OF THE  
PRESUMPTION OF INNOCENCE AS A GUARANTEE OF THE CRIMINAL  
PROCESS, AGAINST THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION AND  
INFORMATION (MEDIA)**

**LUIS HERNANDO CASTELLANOS MERCHÁN  
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA**

**Resumen**

Este trabajo investigativo busca analizar por medio de la investigación hermenéutica cuál derecho prima respecto a la protección de la presunción de inocencia del investigado y la libertad de expresión e información de los medios de comunicación. Partiendo de la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional de Colombia y diferentes conceptos realizados por doctrinantes a nivel nacional. Es importante manifestar que a partir del año 1991 se considera como garantía procesal la presunción de inocencia, pero este derecho ha sido vulnerado por varios años, ya que la repercusión de los medios noticiosos e información frente a la investigación procesal penal interviene y equipara la judicialización, ya que un manejo inadecuado de la información traería vulneraciones al debido proceso especialmente a la presunción de inocencia de los procesados, dejando como conclusión principal que el derecho al debido proceso prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión e información, puesto que, este último es un derecho de doble vía, es decir cuenta con límites en la ejecución del mismo, contando con derechos y deberes.

**Palabras clave**

Colombia, presunción de inocencia, acceso a la información, medios de comunicación, derechos fundamentales, debido proceso.

**Abstract**

This investigative work seeks to analyze through hermeneutical research which right prevails with respect to the protection of the presumption of innocence of the investigated and the freedom of expression and information of the media. Based on the jurisprudence established by the

Constitutional Court of Colombia and different concepts made by doctrinants at the national level. It is important to state that since 1991 the presumption of innocence is considered as a procedural guarantee, but this right has been violated for several years, since the repercussion of the news and information media in the face of the criminal procedural investigation intervenes and equates the prosecution, since an inadequate handling of the information would bring violations to due process, especially to the presumption of innocence of the defendants, leaving as the main conclusion that the right to due process prevails over the right to freedom of expression and information, since this The latter is a two-way right, that is, it has limits in its execution, with rights and duties.

### **Keywords**

Colombia, due process, presumption of innocence, access to information, media, fundamental rights.

### **Sumario**

Introducción. 1. El debido proceso y la libertad de expresión e información como derecho fundamental. 1.1. Naturaleza jurídica y conceptualización del derecho al debido proceso. 1.2. Naturaleza jurídica y conceptualización del derecho a la libertad de expresión e información. 2. Incidencia de los medios de comunicación dentro del proceso penal, principal obstáculo para la protección de la presunción de inocencia. 3. Límites otorgados por la Corte Constitucional a través de la jurisprudencia al derecho de la libertad de expresión e información de los medios de comunicación. Conclusiones. Referencias.

### **Introducción**

Los medios de comunicación en Colombia realizan su trabajo y solicitan la protección al derecho constitucional de la libertad de expresión y el debido proceso, el cual se encuentra regulado y garantizado a través de la Constitución Política en su artículo 20, este derecho otorga los beneficios de entregar información veraz e imparcial, al igual que la creación de medios masivos de comunicación (Constitución Política de Colombia, 1991, artículo 20).

Por otro lado, se observa que la Constitución Política de 1991 puso en marcha los mecanismos en pro de garantizar y proteger los derechos fundamentales, uno de ellos es el debido

proceso salvaguardado por el artículo 29; siendo este uno de los más importantes, puesto que en él se encuentran garantías y principios procesales como el principio de favorabilidad y presunción de inocencia.

En Colombia se observa que los medios de noticiosos e informativos participan de forma activa dentro de los procesos en diferentes facetas, antes de la investigación, en las audiencias, en la toma de decisiones y en otras actuaciones que genera impactos negativos y positivos de la vida de los investigados y quienes reciben la información, todo esto lo realizan bajo la práctica de la libre expresión y el principio de publicidad. Así las cosas, mediante este artículo investigativo se pretende dar respuesta a la pregunta problema ¿Qué derecho prevalece entre la presunción de inocencia del investigado penalmente y el derecho a la libertad de expresión e información por parte de los medios de comunicación dentro de un proceso penal?, es de suma importancia comprender las vulneraciones que realizan los medios de comunicación al atacar la presunción de inocencia de aquellas personas que se enfrentan a una investigación jurídica sin contar con una sentencia condenatoria, pues en varias ocasiones afirman que éstas personas son culpables sin culminar la investigación, sin tener una audiencia, sin iniciar una investigación penal o haber sido declarados culpables de los hechos.

Para dar respuesta a la pregunta anteriormente planteada se desarrollarán tres capítulos el primero de ellos comprenderá los antecedentes, la naturaleza jurídica y conceptualización del derecho al debido proceso y del derecho a la libertad de expresión e información, puesto que es de suma importancia comprender las características de cada uno y de donde provienen; en segunda medida se analiza la incidencia que realizan los medios de comunicación dentro de un proceso penal, siendo este el principal obstáculo para el amparo del derecho a la presunción de inocencia, allí se desarrollarán dos casos emblemáticos en Colombia. Finalmente, se identificarán los límites otorgados por la Corte Constitucional a través de la jurisprudencia al derecho de la libertad de expresión e información de los medios de comunicación.

### **1. Derechos fundamentales al debido proceso y el derecho a la libertad de expresión**

Para dar inicio al desarrollo de este artículo investigativo es importante hablar de los derechos fundamentales, por ello al dar una concepción de ellos se debe hacer referencia a la Constitución Política de 1991, ya que es la norma primaria en Colombia, mediante la cual se buscaba crear y garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la inclusión de principios

democráticos que fundan a un Estado. Los derechos fundamentales tienen dos dimensiones, la primera es una condición que posibilita la acción de los espacios públicos democráticos y la segunda, hace referencia a los sujetos autónomos los cuales se consideran libres e iguales, siendo así miembros activos de una comunidad jurídica (Durango, 2010). Teniendo en cuenta lo anterior, se logra aseverar que los derechos fundamentales son normas legales creadas por cada Estado con el objetivo de proteger los derechos humanos cabe recalcar que estos derechos teniendo en cuenta la concepción iusnaturalista, son los que poseen los seres humanos por el hecho de nacer, es decir son todos los derechos que todos los individuos deben reconocer para sí mismos y para los demás, mientras que los fundamentales o llamados “derechos constitucionales” son aquellos escritos y protegidos por la Constitución de cada Estado, por ello adquiere un rango supremo, estos se derivan de los derechos humanos (Huerta, 2020).

### **1.1. Naturaleza jurídica y conceptualización del derecho al debido proceso**

Para dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué derecho prevalece entre la presunción de inocencia del investigado penalmente y el derecho a la libertad de expresión e información por parte de los medios de comunicación dentro de un proceso penal?, es importante analizar y conceptualizar la figura jurídica del derecho al debido proceso, adentrando a los alcances de este derecho teniendo en cuenta la Constitución Política de 1991, por ello, como primera medida se conceptualizará el debido proceso, de esta manera se tiene en cuenta el concepto realizado por Corte IDH (1999) afirmando que: “es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A este fin entiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal” (Párrafo 117). Así las cosas, el debido proceso es un principio fundamental en el sistema penal.

Este derecho se observó por primera vez en la Carta Magna de (1215), señalando que es el principio legal que obliga a los Estados parte de proteger y respetar los derechos intrínsecos de una persona, de esta manera se señala en su artículo 20:

“Ningún hombre libre podrá ser multado por una pequeña falta, sino según el grado de la falta; y por un gran crimen, en proporción a la gravedad de él; salvo las cosas que posee juntamente con el fundo que tiene; y si fuere comerciante, salvo su mercadería. Y un villano podrá ser multado de la misma manera, salvo su aparejo de carro, si cayere bajo

nuestra clemencia; y ninguna de las dichas multas será adjudicada sino por el juramento de hombres buenos del vecindario (por un jurado)” (Rodríguez, 2015. Pág. 15).

Igualmente, el profesor Santana (2016), menciona sobre la concepción anglosajona de este derecho, y menciona que:

“En el siglo XIII los hombres normandos cansados de los abusos de la monarquía se enfrentaron al rey Juan Sin Tierra y presionaron porque se incorporarán unas reglas claras, 7 lo que dio origen a la Carta Magna en el año 1215 (...). Aunque no se hiciera mención directa y nominal del debido proceso, porque en principio el postulado estaba relacionado con la “*per legem terrae*” o ley de la tierra, lo cierto es que desde entonces el desarrollo de la institución del debido proceso se ha construido jurisprudencialmente en el derecho anglosajón, incluso se consolidó en el deporte, por ejemplo, con la creación del fútbol en Inglaterra en el siglo XVII”. (Santana, 2016, Pág. 26).

Colombia al ser un Estado Social de Derecho se ha adherido a varios tratados, convenciones y organizaciones internacionales, creando acuerdos con otros Estados en pro de mejorar temas sociales, políticos, económicos y culturales, por ello es importante hablar de la noción del debido proceso manifestada por las Naciones Unidas, quien refiere que:

“El debido proceso implica el camino a seguir para que el Estado pueda legítimamente afectar los derechos fundamentales; es decir, el conjunto de requisitos que deben observarse a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto del Estado que pueda afectar sus derechos”<sup>1</sup> (Naciones Unidas, 2012, párrafo. 11).

Seguidamente en la Constitución Política de Colombia de 1991, se regula el principio fundamental del debido proceso el cual se encuentra tipificado en el artículo 29, señalando que:

---

<sup>1</sup> “El derecho al debido proceso ocupa un lugar de vital importancia dentro del sistema de protección de los derechos fundamentales. No cabe hablar de exigibilidad y protección de nuestros derechos sin debido proceso. Es por ello que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, colocan a este derecho como el eje sobre el que gira el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. (Como se citó en: Prólogo al “Barómetro Local”. Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, A. C. México, 2007) (Naciones Unidas, 2012, pág. 5).

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso” (Const., 1991, artículo. 29).

Así las cosas, se observa que este derecho fundamental va dirigido o debe ser protegido por los entes públicos que administran justicia o inician procesos administrativos, al ser este documento una investigación dirigida al sistema penal, se refiere que la obligación de proteger este derecho fundamental está en manos de la fiscalía, y la jurisdicción penal, así lo expresó la Corte Constitucional, quien manifestó que:

“El debido proceso compendia la garantía de que todos los demás derechos reconocidos en la Carta serán rigurosamente respetados por el juez al resolver asuntos sometidos a su competencia, como única forma de asegurar la materialización de la justicia, meta última y razón de ser del ordenamiento positivo” (Corte Constitucional de Colombia, 2001, Párrafo 3. MP. Carlos Gaviria Díaz. Sentencia C-252/01).

Continuando con el desarrollo de la investigación, se puede afirmar que el debido proceso es un conjunto de varias garantías procesales teniendo en cuenta la definición del artículo 29 de la Constitución Política, por ello el procesado o investigado penalmente siempre tendrá derecho a que se le garanticen la protección de los principios y se logre una aplicación adecuada de justicia, de esta manera el ente jurídico tiene la obligación de actuar en forma legal de acuerdo a la norma de normas, garantizando el ejercicio pleno de los derechos fundamentales a las personas partes de un proceso penal, igualmente este principio al ser conocido como una garantía procesal lo comprenden varios derechos a continuación se nombran algunos:

“a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.

b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.

c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso” (Corte Constitucional de Colombia, 2010, párrafo 20. MP. Gabriel Eduardo Mendoza. Sentencia C-980/10).

Finalmente, se puede concluir que el debido proceso es una garantía procesal la cual busca o tiene como objetivo principal la defensa de la debida imposición de justicia, buscando siempre la protección de los derechos fundamentales de las personas, especialmente aquellas que son parte de un proceso penal, garantizando el amparo de la vida, honra y demás libertades que les confiere la Constitución Política, este es uno de derechos los más importantes, ya que en varias ocasiones se es vulnerado tanto en el territorio nacional e internacional, al ser un derecho y una garantía procesal otorga la oportunidad de que cada investigación o proceso sea equitativo y transparente, y guiado a la protección de los derechos del investigado, así mismo “el derecho al debido proceso es fuente de otros derechos como el de la defensa, contradicción, doble instancia, legalidad, presunción de inocencia, entre otros, que hace garantista nuestro sistema jurídico” (Sierra, 2017, pág. 10). Por ello, anteriormente se realizó la concepción y el recuento de sus antecedentes jurídicos, puesto que cada persona tiene derecho de conocer con cuales instrumentos cuenta para recibir un trato justo, siguiendo los lineamientos jurídicos, en pro de proteger la igualdad.



## **1.2. Naturaleza jurídica y conceptualización del derecho a la libertad de expresión e información**

Como se evidencia en la introducción el tema central de este artículo es la incidencia que tienen los medios de comunicación dentro de los procesos penales, puesto que en varias ocasiones afectan el derecho al debido proceso de los investigados, alegando el derecho a la libertad de expresión, de esta manera es de suma importancia hablar de la naturaleza jurídica y de la concepción de este derecho en el ordenamiento colombiano “Las libertades, valga decir, son fruto de un proceso que culmina con las primeras conquistas de corte revolucionario del constitucionalismo liberal del siglo XVIII y se configuran como un derecho esencial dentro del desarrollo de nuestra sociedad” (Góngora, 2016, pág. 8).

La libertad de expresión proviene desde la Declaración Inglesa de 1689 (Bill of Rights), mediante el cilindro de Ciro en 539 a.C., se observaron los primeros rasgos de la libertad de expresión, puesto que se otorgó la oportunidad a los esclavos de escoger su religión, de esta manera se exterioriza las creencias o pensamientos religiosos de la población (Molano, 2017, pág. 6).

La libertad de expresión e información es aquel derecho fundamental que permite a una persona a expresar ideas, opiniones, acceder, recibir y difundir información idónea por cualquier medio de expresión. Como primera medida, este derecho se encuentra protegido por La Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual expone que:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, artículo. 19).

El derecho fundamental a la libre de expresión proviene desde hace varios iniciando por la Constitución de Cundinamarca de 1811, allí se expone la libertad de imprenta teniendo como contravención la publicación de escritos obscenos, seguido a ello se observa la Constitución de Cúcuta de 1821, quien regula la libertad de expresión en el artículo 156, continuando con la reseña historia se observa la Constitución de 1886 permitiendo la libertad de prensa, pero allí mismo le obliga a realizarlas conforme a la ley, sin vulnerar los derechos de otras personas, de ser así debe enfrentar la responsabilidad; para los años 1949 – 1957 se observa una restricción al ejercicio de este derecho, puesto que se presentaron persecuciones a los mandatos de esta época (Andrade,

2016). Posteriormente, llega la Constitución de 1991 que a través del artículo 20 describe el derecho a la libertad de expresión e información de manera completa, siendo el siguiente:

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” (Const., 1991, art. 20).

“Se reitera la injerencia que tienen los derechos a la información y la libertad de prensa, en el desarrollo y funcionamiento del sistema democrático, al ser tenido como un medio de control del orden público en general” (Velásquez, 2019, pág. 8). Teniendo en cuenta lo anterior, este derecho va dirigido para todas las personas, pero en esta investigación es pertinente centrarse en el ejercicio del mismo de los medios de comunicación, por ello se hace alusión a la concepción de la Corte Constitucional, referente a este derecho y los medios informativos.

“En el caso de la libertad de expresión ninguna duda cabe en torno a la coincidencia entre su inclusión dentro de dicho capítulo como derecho fundamental y la sustancia de su contenido como uno de los derechos de mayor trascendencia, tanto desde el punto de vista relativo a la persona como en la perspectiva de la sociedad, en especial dentro de un Estado de Derecho. La Constitución Política de 1991 amplió considerablemente la concepción jurídica de esta garantía y avanzó hacia su consagración como derecho humano que cubre ya no solamente la posibilidad de fundar medios periodísticos y, en general, medios de comunicación, y de acceder a ellos para canalizar hacia la colectividad la expresión de ideas y conceptos, sino que cobija las actividades de investigación, y obtención de informaciones, así como el derecho de recibirlas, a la vez que el de difundirlas, criticarlas, complementarlas y sistematizarlas (...)” (Corte Constitucional de Colombia, 1992, párrafo 2. MP. José Gregorio Hernández Galindo. Sentencia T-512/92).

De esta manera se entiende, que el derecho a la libertad de expresión también tiene unos deberes y por ende el derecho no puede exceder o vulnerar el derecho de la otra persona, pues en varias ocasiones los medios de comunicación alegan que están brindando dicha información sea errónea o verídica, violentando los derechos fundamentales de otra persona, para este caso quebranta las garantías procesales de un investigado, por ello la Corte a través de la jurisprudencia

a establecido la naturaleza del derecho a la información, respecto de los medios de comunicación y cuáles son sus límites.

“El de la información es un derecho **de doble vía**, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún, como ya se dijo, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas. No siendo un derecho en un solo y exclusivo sentido, la confluencia de las dos vertientes, la procedente de quien emite informaciones y la alusiva a quien las recibe, cuyo derecho es tan valioso como el de aquél, se constituyen en el verdadero concepto del derecho a la información. debidamente probada la infracción del ordenamiento jurídico por un medio de comunicación, ha de poder concretarse en el campo de la **responsabilidad penal** por los delitos que se cometan no en uso sino en abuso de la libertad en contra de muy diversos intereses, y en el de la **responsabilidad civil** por los perjuicios debidos a los excesos que se cometan pretextando el ejercicio de la libertad de información, todo sin perjuicio de la **responsabilidad ante la opinión pública**” (Corte Constitucional de Colombia, 1992, párrafo 2. MP. José Gregorio Hernández Galindo. Sentencia T-512/92) (Subrayado del texto original).

Finalmente, se evidencia que la Corte les otorga responsabilidades a los medios de comunicación a la hora de ejercer su derecho de expresión e información, así las cosas, se habla de una responsabilidad social por el ente comunicativo.

“El régimen constitucional colombiano al tiempo que garantiza la libertad de los medios de comunicación, prescribe que la misma debe desarrollarse con “responsabilidad social”. Esta se hace extensiva a los periodistas y particulares que se expresan a través de los medios, en atención a los riesgos que éstos plantean y su potencial de lesionar derechos de terceros, así como por su poder social y su importancia para el sistema democrático. Concretamente, los medios están sujetos a los parámetros de: (i) distinción entre informaciones y opiniones, (ii) veracidad, (iii) imparcialidad y (iv) garantía del derecho de rectificación. A continuación, se profundizarán cada uno de estos límites”

(Corte Constitucional de Colombia, 2015, párrafo 2. MP. Jorge Iván Palacio Palacio, Sentencia T-312/15).

## **2. La incidencia que realizan los medios de comunicación dentro de un proceso penal, principal obstáculo para la protección de la presunción de inocencia**

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, es importante hablar que dentro de las garantías procesales se encuentra protegido el debido proceso, siendo este un derecho fundamental garantizado por la Constitución Política de Colombia en su artículo 29, allí se evidencia en el inciso número uno la presunción de inocencia<sup>2</sup>, garantía clave para el desarrollo de este artículo de investigación. Así las cosas, la presunción de inocencia como regla de trato procesal, no puede ser vulnerada por ningún ente público o privado, tampoco puede ser violentada por ninguna persona sea natural o jurídica, por ello, a cualquier indiciado, se le deben garantizar los derechos constitucionales y así mismo los preceptos legales que esta figura pretende.

En la norma señala taxativamente el derecho, igualmente ha sido desarrollado por la Corte Constitucional a través de la jurisprudencia la protección de la presunción de inocencia, pero esto no quiere decir que en la práctica sea respetada, ya que, en varias ocasiones se observa que este derecho se ve violentado y vulnerado en su mayoría por los medios de comunicación, quienes profesionalmente no tienen conocimiento amplio de la norma, omitiendo los requisitos para disponer de la información de manera amplia sin afectar a diferentes personas. En ciertas ocasiones los medios de comunicación o los profesionales en comunicación social y periodismo soportan sus acciones manifestando el derecho a la libre expresión y todo lo que de él desprende como el derecho a estar informados y acceder a la información, manifestando que al igual que las garantías procesales, es un derecho protegido por la Constitución Política en el artículo 20<sup>3</sup>, lo anterior, es una discusión que se ha manejado por varios años y cabe recalcar que los derechos humanos tienen

---

<sup>2</sup> **ARTICULO 29.** El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio (Const., 1991, Art. 29)

<sup>3</sup> **ARTICULO 20.** Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura (Const., 1991, Art. 20)

límites, así lo manifiesta Fernández (SF) “Que tu derecho termina donde comienza el derecho de tu prójimo” (Pág. 221).

Como se menciona anteriormente, esta discusión ha perdurado por varios años, pues los medios de comunicación tienen información o documentos con anticipación a los entes de investigación como la fiscalía, lo que afecta que el trabajo judicial sea de manera transparente y eficaz. El doctor Silva (2001) a este problema le otorga el nombre de *Justicia espectáculo*, puesto que:

“La antigua forma de impartir justicia, cuando el juez llevaba las causas sometidas a su conocimiento con discreción hermética, en los tiempos en los cuales solo se pronunciaba a través del texto escrito de sus sentencias, tiende a desaparecer y, aunque a veces se recuerda con añoranza, lo cierto es que hoy es improbable que vuelva. Las decisiones judiciales se conocen primero en los medios, antes que en la resolución, auto o sentencia; los operadores judiciales las revelan y explican por conducto de los micrófonos y las cámaras, sin que todavía hayan sido redactadas. Tampoco los jueces pueden resistirse a las exigencias de los medios y las demandas de información de la opinión: de no revelar la conclusión de fallo antes de la redacción de la sentencia, él mismo filtrará en una versión extraoficial o se incrementarán las posibilidades para presionar o intentar manipular la decisión (como se citó en: Silva, 2001, pág. 231)” (López, 2018, pág. 193).

Así las cosas, se observa la irresponsabilidad de los medios de comunicación de respetar los procesos judiciales, pues otorgan información de decisiones sin que la sentencia haya sido notificada o informada a las partes, así mismo, los MC son quienes a través de sus medios indican las funciones judiciales desarrolladas por la fiscalía en un proceso, informando a la comunidad de los hechos, documentos probatorios, y versiones que se desarrollan dentro de una investigación, afectando de esta manera el derecho de la presunción de inocencia de las personas que son sujeto de investigación dentro de los procesos, puesto que, en ocasiones realizan señalamiento de culpables, sin existir sentencia o decisión judicial alguna, afectando el debido proceso y violentando el derecho a la presunción de inocencia de los investigados.

Por ello se observa que, el mal uso del derecho de libertad de expresión e información manifestado por los medios de comunicación trae grandes problemas y violaciones a las garantías procesales, puesto que, en su mayoría son vulneradas al inicio del proceso penal, generando

señalamiento anticipado de la población a un individuo que hasta el momento es inocente, así lo manifiesta Ferrajoli (1997):

“La antigua función infame del derecho penal premoderno, cuando la pena era pública y el proceso secreto. Sólo que la picota ha sido sustituida por la exhibición pública del acusado en las primeras páginas de los periódicos o en el televisor; y no como consecuencia de la condena, sino de la acusación, cuando todavía es un presunto inocente (como se citó en: Ferrajoli, 1997, pág. 732)” (Bernal, 2012, pág. 91).

Es importante recalcar a la población y en especial a los medios de comunicación y quienes ejercen esta profesión, que mientras que no se evidencia o sea notificada una sentencia o decisión judicial en firme, nadie podrá señalar o referir a una persona como culpable de un acto delictivo, pues de esta manera está vulnerando unos derechos constitucionales, especialmente la presunción de inocencia prevista en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia; igualmente, se observa que los MC crean publicaciones perjudiciales relacionadas con un proceso pendiente generando perjuicios a las partes, a la par otorga presiones al poder judicial directamente y afectando al igual a los testigos, investigadores, peritos entre otros, así lo expresa Valdecabres Ortiz (2004):

“(…) otros protagonistas del proceso -excluidos los jueces- con el efecto de perjudicar a los intereses de alguna de las «partes». Suelen referirse a la publicación de las circunstancias que rodeen la comisión del delito, la detención, la eventual confesión del acusado, sus antecedentes, presuntas pruebas de cargo, historias acerca de los testigos, víctimas, etc., cuando el juicio es inminente o durante el mismo. Particularmente tendenciosa ha estimado el TSFA la publicación de aquellos hechos u opiniones que crean una atmósfera de hostilidad (también lo serían las que persiguen la adhesión) social hacia el caso, que revelan los hechos (inculpatórios o exculpatórios) que no serían admitidos como pruebas en el juicio o que de cualquier otro modo incidan sobre la voluntad de quienes prestan testimonio y, sobre todo, de quienes están llamados a decidir sobre la culpabilidad o inocencia del acusado” (pág. 225).

Se logra observar que la influencia de los medios de comunicación en las decisiones judiciales en materia penal es grande, pues se analiza que en ocasiones los jueces van a decidir en pro de ofrecer una decisión ajustada para los medios de comunicación y la población, ya que es un

impacto inmediato en los medios, dejando de lado la toma de decisiones en pro del respeto y protección de las garantías procesales del investigado, vulnerando la presunción de inocencia dejando en evidencia que la exposición pública del imputado forma:

“(i) una presunción de culpabilidad o una condena anticipada, (ii) presiones sobre el órgano judicial por crear expectativas en la “opinión pública” sobre el sentido del fallo y la pena a imponer<sup>15</sup>, así como (iii) una posible incidencia en la percepción de los hechos por parte del juez, quien, como miembro de la comunidad, también se ve “bombardeado” por la información presentada por los medios de comunicación y, en consecuencia, al enfrentarse a una controversia específica, puede tener prejuicios sobre los hechos y los cargos formulados por la fiscalía” (Bernal, 2012, pág. 91).

Por eso, se realiza un llamado a los funcionarios públicos dejando claro que primero se debe priorizar las garantías procesales penales del investigado, que los derechos de los medios de comunicación, puesto que ellos dentro del desarrollo de la libertad de expresión están infringiendo el mismo, ya que la norma señala:

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura” (Const., 1991, art. 20).

Se evidencia que la norma manifiesta que tienen libertad de “informar y recibir información veraz e imparcial” allí el legislador pone un deber a los medios de comunicación, por ello al señalar a un investigado como culpable en la acción de un delito cuando no existen sentencias judiciales en firme, está entregando información errónea e imparcial, atentando así con el desarrollo de dos derechos tanto como el debido proceso especialmente la presunción de inocencia y el propio derecho de la libertad de expresión e información. La población espera de los medios de comunicación “buena fe en el ejercicio de la profesión de informar, diligencia en la adquisición de datos, contrastación, verificación y una adecuada y eficiente responsabilidad social de los medios de comunicación cuando se requiera rectificar” (Betancur, 2017, pág. 32).

Igualmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado que los periodistas y los medios de comunicación tienen responsabilidades para transmitir información verídica, protegiendo los derechos de los investigados.

“La Corte Constitucional, con variantes dentro de un espíritu coincidente con la jurisprudencia comparada, reconoce la trascendental función de la libertad de prensa en una democracia, pudiendo los medios masivos de comunicación mantener informada a la población sobre las más diversas materias, incluso en lo que tiene que ver con las investigaciones, procesos y decisiones judiciales y de policía. No obstante, la libertad de prensa debe ejercerse de tal forma que ella respete los derechos al buen nombre, a la honra y al debido proceso, debiendo los medios de comunicación rectificar las informaciones que comprobadamente hayan sido presentadas en forma errada o sesgada (artículo 20 C.P.) lesionando derechos constitucionales” (Corte Constitucional de Colombia, 2003, párrafo 4, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia T-1225/03).

Teniendo en cuenta la exposición realizada anteriormente, es importante evidenciar los casos expuestos en la jurisdicción penal, donde se observa la vulneración de la presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación a los investigados en un proceso penal, a continuación, se pondrá en presente dos casos: i) Hermanos Noguera – caso Yuliana Samboní y Rafael Uribe Noguera; ii) Caso: Alejandro Salamanca – conductora de transporte SITP Bogotá<sup>4</sup>.

#### **i) Hermanos Uribe Noguera – Caso: Yuliana Samboní y Rafael Uribe Noguera**

En diciembre del año 2016, una niña no mayor de seis años fue raptada de su casa en el barrio Bosque Calderón de la ciudad de Bogotá; la menor de nombre Yuliana Samboní fue engañada y retenida de su hogar por el Señor Rafael Uribe Noguera con intención de que la misma subiera a su camioneta gris a través de artimañas, al lograr subirla al automóvil, se dispuso a huir

---

<sup>4</sup> El análisis de los casos desarrollados dentro de este capítulo son de uso meramente académico, puesto que se analizan en pro de identificar los temas tratados en la investigación académica referente a los del debido proceso y la libertad de expresión y dar un ejemplo verídico de la información, estos casos son tomados de las publicaciones realizadas por la prensa (televisión, radio, periódicos y revistas), así mismo se hizo uso de documentos publicados por la Fiscalía General de la Nación y los Tribunales de Bogotá. Se entiende que fueron dos casos mediáticos que pudieron afectar la sensibilidad de las personas y por ello puede ser de uso susceptible, de esta manera se aclara que no se toma partido para ninguna de las partes y simplemente se menciona a manera de ejemplo.



con la menor del lugar, los padres al no tener información del paradero de su hija se comunicaron con las autoridades policiales a quienes les brindaron las placas del carro y descripción de la persona que la raptó, de esta manera se logró ubicar al Señor Uribe Noguera al norte de la ciudad, en un apartamento de uso personal por él, allí la menor fue hallada muerta debajo de un jacuzzi, se evidenció que fue accedida carnalmente y falleció por estrangulamiento.

A lo largo de la investigación por hallar al Señor Uribe Noguera, quien no contestaba las llamadas telefónicas y el timbre del apartamento, sus hermanos Carolina y Francisco Noguera ayudaban con la investigación y buscaban respuestas por parte del hermano de lo que estaba sucediendo, por ello, decidieron llamar abogados para poner en conocimiento los hechos, intervinieron el apartamento y la camioneta de Uribe Noguera. Cuando los hermanos Uribe lograron encontrar a su hermano lo llevaron a una Clínica de la Capital colombiana, allí se evidenció que tenía una sobredosis. En el transcurso de hallar el cuerpo de la niña y de esperar la información otorgada por Rafael Uribe pasaron aproximadamente 24 horas, desde el momento de la denuncia y durante este tiempo los medios de comunicación inician un trabajo y realizan señalamientos fuertes en contra de la familia Uribe Noguera, así se evidencia la publicación realizada por Caracol Radio:

“Serían **el hermano y la hermana de Rafael Uribe Noguera** quienes lo habrían ayudado a manipular la escena del crimen para entorpecer la investigación por la **muerte Yuliana Samboní...** Al parecer el cadáver de la menor lo escondieron en un cuarto del baño y luego lo colocaron en la bañera, lo habrían lavado para quitar los rastros de sangre. Los investigadores encontraron un zapato de la niña el carro y otro en el apartamento de Uribe Noguera” (Caracol Radio, 2016, párrafo 1).

Los hechos señalados por diferentes medios de comunicación, no lograron ser probados por parte del ente investigador (Fiscalía), así las cosas, a través de la sentencia de 09 de agosto de 2019, el Juez F sentencia de 09 de agosto de 2019, el juez Fernando González Olave, resuelve:

“**ABSOLVER** a Catalina Uribe Noguera (...) y Francisco Uribe Noguera (...) de los cargos formulados en su contra por los punibles de **ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio en concurso heterogéneo con favorecimiento**, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente pronunciamiento” (Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito de Bogotá. 2019. Pág. 79) (Subrayado en el texto original).

Se logra concluir que respecto a este caso los hechos fueron de uso público y la información y documentos probatorios fueron obtenidos de primera mano por parte de los medios de comunicación, según los vigilantes y vecinos del bien inmueble donde fue hallada la menor, los periodistas estuvieron durante más de tres días en el lugar de los hechos, recogiendo información sin permiso del ente investigador, ya que se evidencia una competencia en los medios de comunicación en obtener la primicia afectan el debido proceso, especialmente la presunción de inocencia, realizando señalamiento inadecuados sin el recaudo probatorio suficiente.

## ii) Caso: Alejandro Salamanca – conductora de transporte SITP Bogotá

En el mes de julio del año 2015, la ciudad de Bogotá se estremeció con una noticia, pues una Conductoras del transporte público SITP denunció que, fue abusada sexualmente por al menos tres hombres, a continuación, se señala la noticia publicada por la página de Bluradio:

“Según las investigaciones, la mujer transitaba por la **localidad de Patio Bonito** cuando los implicados se subieron al bus y, aprovechando que estaban solos, procedieron a intimidarla con **armas blancas**. El bus fue conducido por uno de los **violadores** hasta un paraje del centro de la ciudad, donde la mujer fue **abusada sexualmente**. Después de cometido el hecho, la abandonaron en la **localidad de Puente Aranda**, cerca del **San Andresito de la carrera 38**, donde la conductora fue encontrada semidesnuda por un policía e inmediatamente fue trasladada al **Centro Policlínico del Olaya** donde permanece interna en estado reservado” (BLUradio, 2015, Párrafos 1-3) (Subrayado en el texto original).

Seguido a este relato y la publicación por varios medios de comunicación, la policía nacional inicio una investigación exhaustiva para evidenciar las pruebas pertinentes e imputar a los culpables de este hecho, en el desarrollo de la investigación se encontró inconsistencias en el relato ofrecido por la conductora, dejando como resultado, una falsa denuncia, así lo menciona el periódico El Tiempo.

“Sin embargo, cuando los investigadores ingresaron a las instalaciones del sistema y recibieron la información técnica de vigilancia y control, la ruta no tuvo mayores sobresaltos, salvo al final, cuando se desvió del paradero, unos cuantos metros, informaron

las autoridades. Otra pieza del rompecabezas fue la prueba técnica realizada dentro del bus: nunca encontraron trazas o rastros de sustancias que evidenciaran el abuso sexual. El domingo, tras varias conversaciones con la conductora, la oficial se comunicó con sus superiores: “Parte de novedad, confesó”. Al parecer, la mujer buscó victimizarse a través de un acto de violencia, con el fin de conseguir un cargo como operadora. En rueda de prensa, el director de la Policía, Rodolfo Palomino, no descartó que la mujer, incluso, se autoflagelara, como también dejó entrever que hubo actos íntimos de la mujer que son de reserva personal, pero que están en investigación por parte de las autoridades” (EL TIEMPO, 2015, Párrafos 14-17).

Durante esta investigación la conductora del SITP realizó un retrato hablado de uno de los supuestos victimarios, allí la fisonomía del mismo coincidió perfectamente con el joven Alejandro Salamanca, quien se dedicaba a las ventas ambulantes en la ciudad de Bogotá. Por ello, cuando el padre de este menor evidenció el daño que le estaban causando a su hijo expuso su inconformismo mediante el periódico El Espectador.

**“Yo lo que pido es que se restablezca el nombre de mi hijo.** El daño que nos hizo esta señora es irreparable, es una desgracia. No hemos podido trabajar, vivimos del día a día y la situación es cada vez más dramática”, dijo Jorge Salamanca en medio de llantos, quien señaló que por temor a **nuevas represalias tuvo que retirar a sus hijos del colegio (tres hermanos menores de Alejandro)** y ahora se están **trasteando del barrio en el que han vivido toda su vida**” (Matiz Cortés, El espectador, 2015, párrafo 13) (Subrayado en el texto original).

Finalmente, se logra analizar que el afán de los medios de comunicación por entregar primicias a nivel nacional, y de presionar al ente investigador deja como resultado la vulneración de derechos fundamentales de las personas, violentando así los derechos de la presunción de inocencia, el debido proceso y a la buena honra y el buen nombre.

Este tipo de noticias tienen un efecto negativo para la persona, quien está siendo investigada o procesada, puesto que la sociedad da por cierto esas imputaciones y no la considera como sospechosa, sino que directamente asume la culpabilidad y peligrosidad de ese sujeto, esto es un rezago del sistema inquisitivo, en el cual se presumía la culpabilidad; esta situación empeora cuando esa noticia va

acompañada de imágenes del sospechoso, siendo detenido o usando (...) (García, 2019, pág. 150).

### **3. Límites otorgados por la Corte Constitucional a través de la jurisprudencia a derecho de la libertad de expresión e información de los medios de comunicación**

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el capítulo anterior, los medios noticiosos e informativos son mediante aquellos que se informa a la población sobre ciertos hechos, tanto a nivel nacional e internacional, en ciertas ocasiones, la incidencia de los MC ha afectado en sobre manera el desarrollo de las investigaciones penales, vulnerando los derechos y garantías procesales de los investigados, por ello la Corte Constitucional de Colombia por medio de su jurisprudencia estableció unos alcances para la aplicación de la libertad de expresión, en primera medida expresó los onces elementos normativos diferenciables de este derecho a continuación se cita lo expresado en la jurisprudencia teniendo en cuenta el énfasis de esta investigación:

“(...). A la luz de tales instrumentos internacionales, se tiene que el artículo 20 de la Constitución contiene un total de once elementos normativos diferenciables: (a) La libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de expresión stricto sensu, y tiene una doble dimensión – la de quien se expresa, y la de los receptores del mensaje que se está expresando. (b) La libertad de buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones de toda índole, que junto con la libertad de informar y la de recibir información, configura la llamada libertad de información. (c) La libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos como información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier medio de expresión; junto con la libertad de buscar información y la libertad de recibirla, configura la llamada libertad de información. (...) (e) La libertad de fundar medios masivos de comunicación. (f) La libertad de prensa, o libertad de funcionamiento dichos medios masivos de comunicación, con la consiguiente responsabilidad social. (g) El derecho a la rectificación en condiciones de equidad” (Corte Constitucional de Colombia, 2007, numeral 4.1.1, MP. Manuel José Cepeda Espinosa, Sentencia T-931/07).

Así las cosas, la libertad de expresión tiene ciertos tipos de discursos protegidos, así lo dispone la Corte Constitucional a través de la sentencia T-145 de 2019:

“Existen discursos especialmente protegidos por el derecho internacional dada su importancia para la democracia o los derechos humanos, entre los que se encuentran: (i) los de contenido político o sobre asuntos de interés público; (ii) discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos y (iii) los que expresan elementos esenciales de la identidad o dignidad personales” (Corte Constitucional de Colombia, 2019, Párrafo 1. MP. Cristina Pardo Schlesinger, Sentencia T-145/19).

Por ello, se analizará el numeral 3 de la apreciación anterior, como primera medida es importante hablar de la libertad de expresión e información y sus diferencias, ya que, los medios de comunicación no pueden exponer que su derecho es el de expresión, pues la función y el objeto principal de estos es otorgar información, por ello se debe hablar del derecho de entregar y recibir información.

“(…) Se diferencia de la libertad de expresión en sentido estricto en que ésta protege la transmisión de todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales de quien se expresa, mientras que la libertad de información protege la comunicación de versiones sobre hechos, eventos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, grupos y en general situaciones, en aras de que el receptor se entere de lo que está ocurriendo. Es un derecho fundamental de “doble vía”, que garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información veraz e imparcial. Así mismo, la libertad de información supone la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para difundir lo que se quiere emitir, mientras que la libre expresión es necesaria únicamente las facultades y físicas y mentales de cada persona para exteriorizar su pensamiento y opinión”. (Corte Constitucional de Colombia, 2013, Párrafo 1. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T-040/13).

Lo anterior deja en evidencia que el derecho de la libertad de información es de “*doble vía*”, siendo uso de los medios de comunicación y de la población Colombia, así lo desarrolla la Jurisprudencia colombiana:

“La libertad de información es un derecho fundamental de doble vía, toda vez que su titular no es solamente quien emite la información, como sujeto activo, sino quien la recibe, como sujeto pasivo, y en esa medida, implica de quien la difunde, responsabilidades y cargas específicas que evite la vulneración de otros derechos fundamentales como el buen nombre, la dignidad y la honra (...). Concretamente, tratándose de noticias o informaciones de interés general que vinculan a una persona con hechos delictivos, que están en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes, los periodistas deben ser especialmente juiciosos y diligentes con el lenguaje que utilizan en la información emitida, pues no pueden inducir al lector a la culpabilidad de la persona nombrada como un hecho cierto, pues se estarían desconociendo los principios constitucionales transcritos” (Corte Constitucional de Colombia, 2013, Párrafo 5. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T-040/13).

Allí mismo, el ente judicial se adentra en realizar una adecuación y alcances al derecho de libertad información principalmente usado por los medios de comunicación, puesto que el ente legislativo hasta la fecha no ha realizado un reglamento adecuado para el uso de este derecho, la Corte Constitucional, a través de la jurisprudencia ha realizado un reglamento referente a los requisitos y las reglas para este derecho, así las cosas, respecto a la veracidad e imparcialidad informa que:

(...). En cuanto a la veracidad como límite interno, la Corte Constitucional ha afirmado que la veracidad de una información hace referencia a hechos o a enunciados de carácter fáctico, que pueden ser verificados, por lo que no cubre las simples opiniones. No obstante, en algunos eventos es difícil en una noticia distinguir entre hechos y opiniones, por ello, se ha considerado que vulnera el principio de veracidad el dato fáctico que es contrario a la realidad, siempre que la información se hubiere publicado por negligencia o imprudencia del emisor. Igualmente, la Corte ha establecido que es inexacta, y en consecuencia en contra del principio de veracidad, la información que en realidad corresponde a un juicio de valor u opinión y se presenta como un hecho cierto y definitivo, por eso, los medios de comunicación, acatando su responsabilidad social, deben distinguir entre una opinión y un hecho o dato fáctico objetivo. La veracidad de la información, ha afirmado la Corte, no sólo tiene que ver con el hecho de que sea falsa o errónea, sino

también con el hecho de que no sea equívoca, es decir, que no se sustente en rumores, invenciones o malas intenciones o que induzca a error o confusión al receptor (...). (Corte Constitucional de Colombia, 2013, Párrafo 2. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T-040/13).

Se logra afirmar que, para este artículo de investigación, el principio más importante de este derecho es la veracidad e imparcialidad de la información otorgada por los medios de comunicación, de esta manera garantizar que la información otorgada y publicada no sea falsa y errónea; primordialmente no afecte los derechos fundamentales de aquellas personas que son investigadas en un proceso penal de manera que no afecte al buen nombre o a la honra. “Por ello se ha dotado al derecho penal de garantías para que la acción penal se ejecute en un ámbito de transparencia, objetividad e imparcialidad, que legitime la pena cuando el Estado logre derrumbar la presunción de inocencia de aquel que ha sido juzgado” (Bernal, 2015, pág. 27).

En dado caso que este ocurra el afectado podrá interponer una acción de tutela para solicitar el amparo de estos derechos e igualmente pretender la rectificación de la información falsa o inexacta.

“La jurisprudencia ha puesto de presente que el desconocimiento del principio de veracidad, en asuntos donde la información emitida sugiere que una persona tiene antecedentes penales o se encuentra vinculada a actividades ilícitas, conlleva la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, garantía prevista en el artículo 29 de la Constitución Política. Lo anterior resulta lógico **si se tiene en cuenta que una noticia no puede adelantarse a los resultados de una investigación judicial, pues se presentaría un desbalance entre la equidad de la información emitida y la recibida que vulnera inevitablemente derechos como la honra y el buen nombre.** (...). No puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de información” (Corte Constitucional de Colombia, 2013, Párrafo 8. MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T-040/13). (Subrayado en negrita propio).

Lo anterior deja claro, que prevalece el derecho de a la presunción de inocencia ante al derecho de información, ya que, de la vulneración de la presunción de inocencia, se desprenden

otros derechos fundamentales que afectan la integridad personal de una persona, en el desarrollo de la jurisprudencia ha manifestado la Corte que se debe trabajar de manera armónica, para que ningún derecho sea vulnerado, es un trabajo difícil, pero es necesario para la protección de los derechos fundamentales de la población colombiana, para ello los medios de comunicación deben negarse a intervenir en los procesos penales, y como se mencionó anteriormente hay unos derechos que tienen limitaciones y el de la libertad de expresión e información es uno de ellos.

“Si el sistema constitucional estuviese compuesto por derechos ilimitados sería necesario admitir (1) que se trata de derechos que no se oponen entre sí, pues de otra manera sería imposible predicar que todos ellos gozan de jerarquía superior o de supremacía en relación con los otros; (2) que todos los poderes del Estado, deben garantizar el alcance pleno de cada uno de los derechos, en cuyo caso, lo único que podría hacer el poder legislativo, sería reproducir en una norma legal la disposición constitucional que consagra el derecho fundamental, para insertarlo de manera explícita en el sistema de derecho legislado. En efecto, de ser los derechos “absolutos”, el legislador no estaría autorizado para restringirlos o regularlos en nombre de otros bienes, derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Para que esta última consecuencia pueda cumplirse se requeriría, necesariamente, que las disposiciones normativas que consagran los “derechos absolutos” tuviesen un alcance y significado claro y unívoco, de manera tal que constituyeran la premisa mayor del silogismo lógico deductivo que habría de formular el operador del derecho como la concepción “absolutista” de los derechos en conflicto puede conducir a resultados lógicos y conceptualmente inaceptables, la Carta opta por preferir que los derechos sean garantizados **en la mayor medida posible**, para lo cual deben sujetarse a restricciones adecuadas, necesarias y proporcionales que aseguren su coexistencia armónica” (Corte Constitucional de Colombia, 1997, párrafo 1. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz, Sentencia C-475/97).

## Conclusiones

Al realizar esta investigación se evidencia que los medios de comunicación generan un impacto alto dentro de las decisiones judiciales, teniendo en cuenta los dos casos mediáticos es posible afirmar que esta incidencia ataca de manera negativa, puesto que arremeten a los



investigados sin tener una sentencia condenatoria y en ciertas ocasiones son señalados culpables sin ser llamados a declarar, trasgrediendo de esta manera los derechos fundamentales y garantías procesales de estas personas.

El caso de los hermanos Uribe Noguera fue uno de los más sonados durante el año 2018-2019, puesto que en ellos se investigaba la complicidad en los delitos realizadas en contra de la menor Yuliana Samboní quien fue violada y asesinada por Rafael Uribe Noguera. Este es un caso que hirió susceptibilidades a la población colombiana dejando desconsolación y sufrimiento, si bien es cierto que los medios de comunicación tienen la potestad de emitir información, esta debe ser verídica y sin intervenir en el proceso de investigación, ya que al realizar afirmaciones sin la existencia de una sentencia en firme puede violentar las garantías procesales de los investigados, hecho que se evidencio en este caso.

Respecto al caso de la conductora del SITP, se evidencia que los medios construyeron rápidamente los hechos, sin evidenciar las inconsistencias que tenía las narraciones otorgadas por la Conductora, la versión de los testigos, la falta de pruebas físicas, entre otras acciones que estaban en investigación, estos medios publicaron la imagen del supuesto abusador, quien fue señalado por la población donde se encontraba domiciliado, si bien es cierto que no se tuvo certeza de los hechos, y como bien dice el derecho de la presunción de inocencia “todo ser humano es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, se vulnero el mismo por los medios de comunicación que afirmaron que él era el victimario.

La presunción de inocencia proviene de un derecho fundamental al debido proceso, pero esta se encuentra protegida como garantía procesal, en la mayoría de ocasiones se expone este es desarrollado solamente para los procesos penales, pero cabe recalcar que esta se puede alegar para cualquier proceso judicial, puesto que es deber del Estado proteger la misma en todos sus ámbitos jurídicos.

La respuesta a la pregunta problema es que la presunción de inocencia prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión y prensa de los medios de comunicación, puesto que este último cuenta con unos límites para su ejecución, ya que es un derecho fundamental de doble vía, puesto que así como tiene la potestad de informar, esta información debe ser veraz e imparcial, es decir los señalamientos sin existir decisiones judiciales que las soporte, son contrarias a la ley y no tienen la verdad absoluta, por ello al realizar acusaciones falsas las personas perjudicadas podrán solicitar

la rectificación ante el medio respectivo, esto quiere decir mediante el medio donde fue publicada la información errónea, inexactas, parcial e imprecisa.

Los medios de comunicación tienen la obligación de comprender los derechos y deberes de los cuales gozan, así mismo si bien es cierto que tienen la potestad de entregar información no quiere decir que puedan realizar sus apreciaciones bajo temas que no tienen comprensión alguna, pues el lenguaje usado jurídicamente es diferente a los profesionales de comunicación, por ello caen en error de mal interpretar las actuaciones procesales por desconocimiento generando vulneración de derechos fundamentales a los investigados.

Finalmente, la Corte Constitucional de Colombia ha sido la encargada de proponer los límites al derecho de libertad de expresión alegado por los medios de comunicación, pero este trabajo no es suficiente para proteger los derechos fundamentales y garantías procesales de las personas que se encuentran inmersas en temas jurídicos, por ello, es deber del Estado regular la actuación de estos medios para que se vean en la obligación de publicar información veraz e imparcial.

## **Bibliografía**

- Andrade Rocha, J.A. (2016). Libertad de expresión: un estudio jurídico comparado con la doctrina CIDH y la jurisprudencia nacional. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/13770>
- Bernal Bermúdez, Laura y Torres Hernández, M. J. (2012). Los medios de comunicación y su participación en la construcción y narración del fenómeno criminal en Colombia. Vniversitas, (125), Pág. 83-119. ISSN: 0041-9060. Disponible en: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0041-90602012000200004](http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-90602012000200004)
- Bernal-Castro, C. A. & Moya-Vargas, M. F. (2015). Elementos que conforman la libertad de expresión: el derecho a informar y a opinar. En C. A. Bernal-Castro & M. F. Moya-Vargas. Libertad de expresión y proceso penal (pp. 25-57). Bogotá: Universidad Católica de Colombia. Disponible en: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/18259>
- Betancur Gaviria (2017). Presunción de inocencia y medios de comunicación: vulneración de un derecho fundamental. Universidad Autónoma Latinoamericana. Facultad de Derecho.

Disponible en:

[http://repository.unaula.edu.co:8080/bitstream/123456789/915/1/unaula\\_rep\\_pre\\_der\\_2017\\_presuncion\\_inocencia.pdf](http://repository.unaula.edu.co:8080/bitstream/123456789/915/1/unaula_rep_pre_der_2017_presuncion_inocencia.pdf)

BLUradio, (2015). Conductora de bus del SITP denuncia que fue violada por tres hombres.

Publicado el 24 de julio de 2015. Disponible en:

<https://www.bluradio.com/nacion/conductora-de-bus-del-sitp-denuncia-que-fue-violada-por-tres-hombres>

Caracol Radio. (2016). Familiares de Uribe Noguera serían vinculados al proceso por la muerte de Yuliana Samboní. Disponible en:

[https://caracol.com.co/radio/2016/12/06/judicial/1481046342\\_736266.html](https://caracol.com.co/radio/2016/12/06/judicial/1481046342_736266.html)

Chaverra Paz, A. F. (2020). Importancia y alcances del debido proceso como derecho fundamental en Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/25276>

Durango Álvarez, G. (2010). El concepto de los derechos fundamentales en la teoría habermasiana: de la acción comunicativa a facticidad y validez. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3648263.pdf>

EL TIEMPO. (2015). Así descubrieron la mentira de la conductora del SITP en Bogotá.

Publicado el 27 de julio de 2015. Disponible en:

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16158398>

Fernández Escalante, A. (SF). Ética y moral: fundamento de la información periodística.

Congreso Hispanoamericano. Pág. 221 – 226. Disponible en:

<https://docplayer.es/55063451-Etica-y-moral-fundamento-de-la-informacion-periodistica.html>

García Yépez, N. (2019). La incidencia de los medios de comunicación en la presunción de inocencia. Universidad de Salamanca. España. Revista CAP Jurídica Central No. 5.

Diciembre, 2019. Disponible en:

<https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CAP/article/view/2258/2203>

- Góngora Hernández, M. L. (2016). Límites a la libertad de expresión en el estado social de derecho. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/11846>
- Huerta, C. (2000). Sobre la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, UNAM. Pág. 69 – 86. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28772.pdf>
- López Pinilla, A. L., & Barragán Garzón, P. A. (2018). Las decisiones judiciales: un dilema entre la legitimidad y la influencia de los medios de comunicación. *Novum Jus*, 12(2), 189-200. Disponible en: <https://doi.org/10.14718/NovumJus.2018.12.2.10>
- Matiz, S. (2015). Falso retrato de conductora del SITP nos dañó la vida: padre de joven afectado. El Espectador. Publicado el 28 de julio de 2015. Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/falso-retrato-de-conductora-del-sitp-nos-dano-la-vida-padre-de-joven-afectado/>
- Molano Beltrán, J. A. (2017). Libertad de expresión: concepto, fundamento, semejanzas y diferencias en los sistemas regionales de protección. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14761>
- Naciones Unidas. (2012). Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Disponible en: [https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/CAT-OP-2\\_sp.doc#:~:text=El%20debido%20proceso%20implica%20el,que%20pueda%20afectar%20sus%20derechos.](https://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/CAT-OP-2_sp.doc#:~:text=El%20debido%20proceso%20implica%20el,que%20pueda%20afectar%20sus%20derechos.)
- Pacheco Gómez, (2000). Los derechos humanos documentos básicos. Santiago de Chile, 2000. Pág. 165 – 178. UNAM. México. Disponible en: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/17.pdf>
- Rodríguez Lozano, J.H. (2015). La evolución de los derechos humanos en el sistema penal colombiano: la materialización de la dignidad humana y el debido proceso una mirada desde 1789. Universidad Libre de Colombia. Facultad de Derecho, ciencias políticas y

sociales. Disponible en:

<https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9364/LA%20EVOLUCI%C3%93N%20DE%20LOS%20DERECHOS%20HUMANOS%20EN%20EL%20SISTEMA%20PENAL%20COLOMBIANO%20LA%20MATERIALIZACI%C3%93N%20DE%20LA%20DIGNIDAD%20HUMANA%20Y%20EL%20DEBIDO%20PROCESO%20UNA%20MIRADA%20DESDE%201789.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Santana, Jorge (2016). El debido proceso. Bogotá: Editorial Prest&gio

Sierra-Pachón, L. N. (2017). De la aplicación del debido proceso en las actuaciones administrativas. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Disponible en:

<https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/15473>

Valdecabres Ortiz, M.I. (2004). Imparcialidad del Juez y medios de comunicación. Tiran lo Blanch y Universitat de Valencia. Valencia. Pág. 181 – 298. Disponible en:

[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=\\_RBOPxGfiuQC&oi=fnd&pg=PA9&dq=incidencia+de+los+medios+de+comunicacion+en+el+derecho+penal+&ots=VhAvTCaJLG&sig=AL0nklxR48htzmz-fufDNW8akxxI#v=onepage&q=incidencia%20de%20los%20medios%20de%20comunicacion%20en%20el%20derecho%20penal&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=_RBOPxGfiuQC&oi=fnd&pg=PA9&dq=incidencia+de+los+medios+de+comunicacion+en+el+derecho+penal+&ots=VhAvTCaJLG&sig=AL0nklxR48htzmz-fufDNW8akxxI#v=onepage&q=incidencia%20de%20los%20medios%20de%20comunicacion%20en%20el%20derecho%20penal&f=false)

Velásquez-Calderón, A. K. (2019). El derecho a la libertad de prensa y de información. Una revisión a su protección y límites de su ejercicio en Colombia. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Disponible en: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/23183>

## **Jurisprudencia**

CIDH. (1999). Ficha Técnica: El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. Jurisprudencia. Disponible en:

[https://www.corteidh.or.cr/ver\\_ficha\\_tecnica\\_opinion.cfm?nId\\_Ficha=18&lang=es](https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica_opinion.cfm?nId_Ficha=18&lang=es)

- Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena (09 de septiembre de 1992). MP. José Gregorio Hernández Galindo. Sentencia T-512 de 1992. Bogotá. Disponible en:  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-512-92.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (25 de noviembre de 1997). MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia C-475 de 1997. Disponible en:  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-475-97.htm>
- Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena (28 de febrero de 2001). MP. Carlos Gaviria Díaz. Sentencia C-252/01. Disponible en: [C-252 de 2001 \(suin-juriscol.gov.co\)](http://www.suin-juriscol.gov.co/view/doc.aspx?id_doc=844)
- Corte Constitucional de Colombia. Sala Tercera de Revisión. (12 de septiembre de 2003). MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-1225/03. Bogotá. Disponible en:  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-1225-03.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. Sala Segunda de Revisión. (22 de mayo de 2007). MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-391/07. Bogotá. Disponible en:  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-391-07.htm#:~:text=La%20Corte%20Constitucional%20ha%20reconocido,consecuencia%2C%20es%20claro%20que%20la>
- Corte Constitucional de Colombia (01 de diciembre de 2010). Sentencia C-980 de 2010. MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Disponible en: [C-980 de 2010 \(suin-juriscol.gov.co\)](http://www.suin-juriscol.gov.co/view/doc.aspx?id_doc=1044)
- Corte Constitucional de Colombia. La Sala séptima de revisión de tutelas. (28 de enero de 2013). MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T -040 de 2013. Disponible en:  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-040-13.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. Sala Sexta de Revisión. (22 de mayo de 2015). MP. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia T-312 de 2015. Bogotá. Disponible en:  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/T-312-15.htm>
- Corte Constitucional de Colombia. Sala Séptima de Revisión. (2 de abril de 2019). MP. Cristina Pardo Schlesinger. Sentencia T-145 de 2019. Bogotá. Disponible en:  
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-145-19.htm>

Juzgado Cuarenta y Seis Penal del Circuito con Función de Conocimiento. (09 de agosto de 2019). Radicado 1100160000050201631680. Sentencia Absolutoria. Juez Fernando González Olave. Disponible en: <https://gmhabogados.com.co/wp-content/uploads/2019/08/Sentencia-Hermanos-Urbe-Noguera-.pdf>

## **Normatividad**

Asamblea General de las Naciones Unidas (1948) La Declaración Universal de Derechos Humanos. París. Naciones Unidas. Disponible en: [La Declaración Universal de Derechos Humanos | Naciones Unidas](#)

Constitución Política de Colombia. (1991). Asamblea Constituyente. Disponible en: [http://secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion\\_politica\\_1991.html](http://secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html)